

**EPROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO**

EXPEDIENTE: 02/2023-PSO-CG.

DENUNCIANTE: De oficio.

DENUNCIADO: Otrora partido político nacional Fuerza por México.

AUTORIDAD SUSTANCIADORA: Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral.

AUTORIDAD RESOLUTORA: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Guanajuato diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante la cual determina el **sobreseimiento del presente procedimiento** iniciado de oficio por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral derivado de la vista del Instituto Nacional Electoral en la resolución INE/CG739/2022 y en cumplimiento con el punto primero del acuerdo **CGIEEG/011/2023** del Consejo General de este Instituto, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 365, fracción II, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, en relación con el diverso 67, fracción II, del *Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*.

GLOSARIO

INE:

Instituto Nacional Electoral.

<i>Instituto:</i>	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
<i>Comisión de Quejas:</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<i>Ley General de Procedimientos:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
<i>Ley General:</i>	Ley General de Partidos Políticos.
<i>Constitución local:</i>	Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
<i>Ley electoral local:</i>	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
<i>Reglamento de Fiscalización:</i>	Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
<i>UTJCE:</i>	Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral de Guanajuato.

ANTECEDENTES

I. Pérdida de registro de Fuerza por México. En la sesión extraordinaria del Consejo General del *INE* celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se aprobó el dictamen INE/CG1569/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

relativo a la pérdida de registro del partido político nacional denominado Fuerza por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio del dos mil veintiuno, mismo que obra en autos del presente procedimiento.

II. Vista al Instituto. El Consejo General del *INE*, a través de la **resolución INE/CG739/2022**, emitida y aprobada, mediante sesión ordinaria del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, ordenó a la Secretaría del Consejo General del *INE* dar vista al Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del otrora partido político nacional Fuerza por México, correspondiente al ejercicio de dos mil veintiuno.

III. Acuerdo del Consejo General. En la sesión extraordinaria del nueve de febrero de dos mil veintitrés del *Consejo General*, aprobó el acuerdo **CGIEEG/011/2023**, en el que se da cumplimiento a lo ordenado en la **resolución INE/CG739/2022**, por lo que se instruye a la *UTJCE* tramitar el procedimiento sancionador ordinario correspondiente por la presunta omisión del **otrora partido político nacional Fuerza por México de editar una publicación trimestral de divulgación y publicación semestral de carácter teórico** correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, lo que pudiera infringir lo establecido en los artículos 443, parte 1, inciso n), de la *Ley General de Procedimientos*; 33, fracción VIII, y 346, fracción XII, de la *Ley electoral local* y 25 apartado 1, inciso h), de la *Ley General*. Cabe precisar que dicho acuerdo fue aprobado por mayoría de los integrantes del *Consejo General*, emitiendo voto en contra el consejero electoral Luis Gabriel Mota, a través de voto particular.

IV. Radicación, registro y procedencia de la vía. Mediante auto del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la *UTJCE* acordó iniciar el procedimiento sancionador ordinario, ordenando su radicación y registro bajo el número de expediente **02/2023-PSO-CG**, justificando la vía ordinaria adoptada para su tramitación.

V. Diligencias de investigación. En el procedimiento sancionador ordinario se ordenaron las siguientes investigaciones preliminares:

- **Mediante acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés,** se ordenó solicitar apoyo al **titular de la Unidad de Oficialía Electoral del Instituto**, a efecto de que, en ejercicio de sus atribuciones, certificara y corroborara el contenido del disco compacto denominado “RESOLUCIÓN OTRORA FXM INE-CG739-2022”. Asimismo, y en relación con lo anterior, mediante acuerdo del ocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este Instituto por cumpliendo con lo solicitado por la autoridad sustanciadora, remitiendo mediante oficio OE/089/2023 la copia certificada del ACTA-OE-IEEG-SE-023/2023.

En relación con lo anterior, en el mismo acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se solicitó el apoyo del licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez, director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a fin de que remitiera la siguiente documentación:

1. Dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del otrora partido político nacional Fuerza por México, correspondientes al ejercicio de dos mil veintiuno.
2. Acuerdo INE/CG1569/2021, relativo a la pérdida de registro de Fuerza por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno.
3. Constancias relativas al estatus del procedimiento de liquidación de Fuerza por México, ello en el caso de que el mismo no se encuentre liquidado.
4. En el caso de que el referido ente ya estuviera liquidado, remita las constancias que acrediten tal liquidación.

Asimismo, por acuerdo del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio INE/UTF/DA/3580/2023, mediante el cual la licenciada Jacqueline Vargas Arellanes, entonces titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, da respuesta a lo solicitado por la autoridad sustanciadora mediante el acuerdo del diecisiete de febrero.

- **Mediante acuerdo del diecinueve de abril de dos mil veintitrés,** se ordenó solicitar apoyo al **titular de la Unidad de Oficialía Electoral del Instituto**, a efecto

de que, en ejercicio de sus atribuciones certificara y corroborara la existencia y contenido de una liga electrónica. Asimismo, y en relación con lo anterior, mediante acuerdo del ocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este Instituto por cumplido con lo solicitado por la autoridad sustanciadora, remitiendo mediante oficio OE/139/2023 la copia certificada del ACTA-OE-IEEG-SE-055/2023.

VI. Ampliación del plazo de investigación. El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, feneció el plazo de los cuarenta días para que la *UTJCE* llevara a cabo la investigación dentro del procedimiento sancionador que nos ocupa, y en esa misma fecha, se ordenó la ampliación de dicho plazo a efecto de contar con todos los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 367, de la *ley electoral local*.

VII. Acuerdo de admisión y causal de sobreseimiento. Mediante auto del nueve de junio de dos mil veintitrés se admitió la denuncia en el presente procedimiento, sin embargo, derivado del resultado de la última investigación preliminar, se advirtió la posible actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 365, fracción II, de la *Ley electoral local*, en correlación con lo dispuesto por el numeral 67, fracción II, del *Reglamento Quejas*, por lo que se ordenó elaborar el proyecto de resolución.

VIII. Remisión del anteproyecto de resolución a la Comisión de Quejas. Mediante oficio *UTJCE/0781/2023*, signado por el titular de la *UTJCE*, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés se remitió a la *Comisión de Quejas*, el proyecto de resolución.

IX. Aprobación del proyecto de resolución por la Comisión de Quejas. En la sesión extraordinaria del diez de julio de dos mil veintitrés, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto de resolución y ordenó su remisión al *Consejo General* para los efectos a que se refiere el párrafo último del artículo 368, de la *Ley electoral local*.

X. Remisión del proyecto de resolución al Consejo General. Mediante oficio

CQyD/045/2023, signado por la presidenta de la *Comisión de Quejas*, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés se remitió al *Consejo General*, el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este *Consejo General* es competente para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en los artículos 356, párrafo primero, fracción I, 361, 367 y 369 de la *Ley electoral local*; 10, párrafo primero, fracción I y 96 del *reglamento de quejas y denuncias*.

Por otra parte, es importante invocar la jurisprudencia 25/2015¹, emitida por la *Sala Superior*, cuyo rubro es: **COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES**, mediante la cual se determinó que, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada:

- i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;
- ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales;
- iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y
- iv) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En atención a lo expresado con anterioridad, este *Consejo General* es competente para resolver el procedimiento sancionador que nos ocupa, pues se actualiza el primero de los supuestos que el citado criterio jurisprudencial señala, esto es, en la legislación electoral local se encuentra prevista como una infracción en que pueden incurrir los partidos políticos, y en el caso en concreto, con base a las pruebas que obran en autos

¹ Emitida por la Sala Superior en sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, que puede consultarse en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.

del presente expediente, se advierte que el otrora partido político nacional Fuerza por México incumplió la obligación de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y una publicación semestral de carácter teórico, lo que constituye conductas infractoras a la normatividad electoral en lo dispuesto por los artículos 33, fracción VIII y 346, fracción XII, de la *Ley electoral local*; y 25, numeral 1, inciso h), de la *Ley General*, mismos que señalan lo siguiente:

Ley electoral local.

“Artículo 33. Son obligaciones de los partidos políticos: [..]

VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

[...]

Artículo 346. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

[...]

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.”

Ley General.

“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:

[...]

h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

[...]”

Lo anterior, por tratarse de un procedimiento sancionador ordinario, cuyo análisis e investigación da inicio a partir de la vista dada a este órgano administrativo electoral por parte del Consejo General del *INE* en la resolución *INE/CG739/2022*, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del otrora partido político nacional Fuerza por México, correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, por lo que el Consejo General ordenó mediante acuerdo *CGIEEG/011/2023* a la *UTJCE* iniciara el procedimiento administrativo correspondiente.

SEGUNDO. Procedencia de la vía. Toda vez que los hechos materia de este expediente no corresponden a las conductas previstas por el artículo 370 de la *Ley*

electoral local, que se tramitan por la vía especial, esto es, no corresponden a conductas que violen lo establecido en el párrafo octavo del numeral 134 de la *Constitución* (fracción I); o, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral (fracción II); o bien, constituyan actos anticipados de precampaña y campaña (fracción III); se concluye que el **procedimiento sancionador ordinario** resultó la vía adecuada para la sustanciación del presente procedimiento, como fue establecido mediante auto del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

TERCERO. Causales de sobreseimiento. En otra tesitura resulta conducente analizar la vista formulada en la resolución INE/CG739/2022, relativa a las probables infracciones a los artículos 443, numeral 1, inciso a), de la *Ley General de Procedimientos*; 25, numeral 1, inciso h), de la *Ley General*; 33, párrafo primero, fracción VIII, de la *Ley electoral local*, lo cual constituye una infracción a la normatividad electoral en términos de lo previsto en el diverso 346, fracción XII, de la *Ley electoral local*, consistente en la omisión del otrora partido político denunciado de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y una semestral de carácter teórico, durante el ejercicio de dos mil veintiuno, las cuales fueron observadas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos, correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno.

Así, en primer lugar, es preciso destacar que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 365, de la *Ley electoral local*, el estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se deberán realizar de oficio y en caso de que la *UTJCE*, advierta que se actualiza una de ellas, se procederá al desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.

Bajo esa tesitura en el caso particular, este *Consejo General* advierte de oficio, que en el presente procedimiento se actualiza una causal de sobreseimiento que impide continuar con el procedimiento sancionador respectivo dado que el sujeto denunciado es el otrora partido político nacional Fuerza por México, del cual mediante dictamen INE/CG1569/2021 emitido por el Consejo General del *INE*, se declaró la pérdida de registro como partido político nacional, en virtud de no haber obtenido por lo menos el

tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno.

Aunado a lo anterior, mediante acuerdo CGIEEG/315/2021 del *Consejo General* del diez de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró que el otrora partido político nacional Fuerza por México no obtuvo el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato.

Además, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de los *Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General*, el otrora instituto político ejerció su derecho, consistente en la presentación de la solicitud de registro como partido político local ante este Instituto.

No obstante, mediante acuerdo CGIEEG/348/2021 del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General determinó improcedente el registro de Fuerza por México, como partido político local al no obtener el porcentaje de votación requerido.

En relación con lo anterior, este *Consejo General* advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 365, párrafo primero, fracción II, de la *Ley electoral local*, y 67, fracción II, del *Reglamento de Quejas*, que literalmente disponen:

Ley electoral local.

“Artículo 365. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

[...]

II. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

[...]”

Reglamento de Quejas.

“Artículo 67. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

[...]

II. La parte denunciada sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro;

[...]”

Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 41, párrafo segundo, base I, párrafo último, de la *Constitución*, establece que:

“El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.”

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley General*, prevé como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En tal escenario, el artículo 96, párrafo 2, de la *Ley General* contempla que, con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

En este sentido, si Fuerza por México ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que en la especie ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder por las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el partido denunciado ya no cuenta con el carácter de partido político nacional, ni estatal, por lo que no puede ser sujeto a sanción en el caso concreto.

Lo anterior, partiendo del hecho de que toda organización o agrupación política que pretenda constituirse como partido político debe obtener su registro ante el Instituto

Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales electorales.

Además, de que dicho registro tiene efectos constitutivos, por lo que, a partir de que lo obtiene, adquiere la personalidad jurídica que le permite gozar de derechos y prerrogativas.

Por otra parte, cabe precisar que la personalidad jurídica entendida como la capacidad jurídica que se reconoce a una persona física, para realizar válidamente los actos procesales que le atañen dentro de un procedimiento, generalmente contencioso, en el que ella es parte. También se extiende a aquella persona física que representa a partidos políticos debidamente acreditada².

Entonces en relación con la pérdida de registro de Fuerza por México como partido político nacional y estatal, el artículo 96 de la *Ley General*, establece que:

Artículo 96.

1. Al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda.

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Disposición legal que en concordancia con el artículo 392 del *Reglamento de Fiscalización*, revela que se pierde la capacidad jurídica, al señalar esta que el partido político que hubiere perdido o le haya sido cancelado su registro, se pondrá en liquidación y **perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales.**

Esta disposición cobra relevancia, pues en el caso concreto, al dar inicio de oficio el procedimiento ordinario sancionador por parte de la *UTJCE* en contra del otrora partido

² Prontuario de Legislación Federal Electoral. Instituto Federal Electoral y Universidad Nacional Autónoma de México. Página 206.

político nacional Fuerza por México, éste ya había perdido su registro y con ello la **extinción de su personalidad jurídica**, perdiendo todo derecho de prerrogativas³; es decir, dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones, excepto las de fiscalización, a través de quienes hayan sido sus dirigentes y ocupado sus candidaturas, pues tales personas deberán cumplir las obligaciones legalmente establecidas en esa materia, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

La situación anterior, cobra relevancia porque, en el presente asunto la *UTJCE* conoce la identidad del denunciado, es decir, el otrora partido político nacional Fuerza por México, pero como ya se acreditó y se señaló en párrafos anteriores de la presente resolución, dicho partido perdió su registro y, por ende, se extinguió su personalidad jurídica, y consecuentemente, la imposibilidad de continuar con la sustanciación del presente procedimiento y emplazarlo en su carácter de denunciado.

Elemento que resulta necesario para que se pudiera proceder a su emplazamiento (lo que, en el caso no acontece) y entonces sí, estar en presencia del inicio de la relación jurídica-procesal del procedimiento; es decir, se trabaría la litis y el partido denunciado estaría en posibilidad de ejercer sus derechos de audiencia y debido proceso, en plena observancia a las formalidades esenciales de todo procedimiento.

En torno a lo anterior, es preciso tener presente que el sobreseimiento o, en su caso, el desechamiento por improcedencia de una denuncia, es una forma de conclusión anormal del procedimiento administrativo sancionador, que se actualiza cuando existe un obstáculo insuperable para el establecimiento de la relación jurídica- procesal (improcedencia), en el primer caso; o cuando, establecida ésta, se vuelve ocioso el dictado de una resolución que decida sobre la controversia planteada (sobreseimiento), en el segundo.

Lo anterior, atiende la necesidad de evitar que los órganos del estado, encargados de administración de justicia, distraigan recursos humanos, financieros y materiales en la emisión de resoluciones que no tendrán un fin práctico, ya sea porque la materia de

³ Criterio similar sostenido en la resolución SG-JRC-302/2021.

disputa ha desaparecido o porque el fallo respectivo sea de imposible ejecución.

En el caso que nos ocupa, como se mencionó anteriormente, el otrora partido político denunciado ha dejado de existir por haber perdido su registro, en consecuencia, se extingue la facultad sancionadora y la prosecución del procedimiento sancionador deja de tener sentido, en virtud de lo cual, lo atinente de acuerdo con la propia norma jurídica, es sobreseer el asunto, dado que el mismo ha quedado sin materia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“Improcedencia. el mero hecho de quedar sin materia el procedimiento actualiza la causal respectiva. El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza

precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.”

Lo resaltado no es de origen.

En otras palabras, lo procedente es sobreseer el presente asunto dado que este *Consejo General* se encuentra imposibilitado para continuar con el procedimiento sancionador ordinario, en razón de que se carece de un respaldo legal para imputar la existencia de una posible infracción al denunciado, así como para imponer una sanción.

Además, es importante señalar que el Consejo General del *INE* ha sustentado el mismo criterio, al emitir diversas resoluciones en los procedimientos ordinarios sancionadores tramitados en contra de extintos partidos políticos; entre otras, las resoluciones INE/CG182/2016, INE/CG1447/2018, INE/CG175/2019, INE/CG177/2019, INE/CG179/2019, INE/CG181/2019, INE/CG184/2019, INE/CG185/2019, INE/CG186/2019, INE/CG187/2019 e INE/CG188/2019.

Asimismo, en la sentencia del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente TEEG-PES-27/2023, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, determinó que se tiene como **concluido el procedimiento especial sancionador**, ante la imposibilidad de continuar su sustanciación, dado que **no es posible jurídica ni materialmente emplazar a Redes Sociales Progresistas, al haberse extinguido su personalidad jurídica por la pérdida de su registro como partido político nacional**, motivo por el cual dicho precedente resulta aplicable al caso concreto, pues no existe la posibilidad de llamar a juicio al partido político nacional Fuerza por México al haber perdido su registro y por ende su personalidad jurídica.

En razón de lo anterior, este *Consejo General*, determina que, respecto del otrora partido político nacional Fuerza por México se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 365 párrafo primero, fracción II, de la *Ley electoral local*; y 67, párrafo primero, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. El *Consejo General* es competente para resolver el presente asunto.

SEGUNDO. La vía del procedimiento sancionador ordinario por la cual se tramitó el asunto es la correcta.

TERCERO. Se **sobresee** el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del otrora partido político nacional Fuerza por México, en términos de lo establecido en el considerando tercero de esta resolución.

CUARTO. Remítase copia certificada de la presente resolución a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese por estrados acompañando copia certificada de la presente resolución para los efectos legales conducentes.

Cúmplase.

Así lo resolvió el *Consejo General*. Firman esta resolución la presidenta del *Consejo General* y la secretaria ejecutiva. **Conste.**